

Permisología: no sólo una instrucción

Sergio España
 Director Subjetiva



Entre sus primeras medidas, el Presidente Kast firmó una instrucción para destrabar 51 recursos de reclamación pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que permitirá concretar inversiones por US\$ 16 mil millones. En el caso de recursos que pendientes en el Consejo de Ministros se establece un plazo de 60 días, que sumarían otros US\$ 9.800 millones.

Instalar el concepto de la permisología y poner como objetivo reducir plazos fue un acierto comunicacional y político. Sin embargo, las normas y procedimientos son solo una parte del problema; la otra, tiene que ver con la oposición que algunos proyectos generan en las comunidades donde se asientan. También son socialmente poco claros los límites de las zonas de influencia y qué comunidades incorporan.

Algunos antecedentes muestran una dualidad interesante. Por una parte, comunidades que tienen la percepción que la negativa o aprobación de proyectos no

considera su opinión, pero sí tienen conciencia del peso que pueden tener sus actos en la toma de decisiones de la autoridad e inversionistas. Por ejemplo, un 79% de los habitantes de Antofagasta cree que es muy difícil que las empresas escuchen las opiniones de las personas, misma cifra que en Santiago (Subjetiva, 2022). Por otra parte, 19% considera que para mejorar la relación con la ciudad las empresas mineras deberían aumentar la participación en la toma de decisiones que afectan a la comunidad.

Las personas saben que no es sólo la permisología lo que permite o no el avance o aprobación de los proyectos, sino la presión que ellos puedan ejercer mancomunadamente. Se instala así una lógica transaccional.

Hay tres premisas, en algunas afirmaciones de autoridades entrantes, políticos y empresarios, que merecen ser revisadas. Una: tras el estallido social ha disminuido la movilización social. En una dimensión nacional es posible que sí, pero observando conflictos socioambienta-

les a nivel local ello no es tan nítido. Dos: el trade off empleo/medioambiente funcionaba a favor de primero en situaciones económicas como la actual. Hay bastante evidencia que ello no siempre es así, en parte porque no se percibe que la inversión conlleve aumento de ofertas laborales para los habitantes de muchas

localidades. Tercero: la derecha tiene mayorías en el Congreso, pero ello no garantiza necesariamente apoyo a proyectos de inversión locales: el 50% de los parlamentarios ingresa por primera vez a la Cámara y una parte significativa de ellos viene de cargos

locales o regionales.

Enfrentar la permisología es un desafío urgente y complejo. Pero más lo es la relación con pequeñas organizaciones locales (que a veces poco y nada tienen que ver con grandes ONG), que se articulan en su oposición a determinados proyectos y conocen a la perfección la lógica de las comunicaciones, especialmente en el uso de las redes sociales.

“Las personas saben que la presión que ellos puedan ejercer es lo que permite o no el avance de los proyectos”.